



Una política industrial europea para empleos de calidad

Adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo de 15-16 de octubre 2024

Europa se encuentra en una coyuntura crítica. La producción industrial está cayendo y la desindustrialización ya no es una amenaza lejana, sino una realidad presente. Las malas decisiones empresariales, la falta de inversiones y la ausencia de una estrategia industrial europea coherente están reconfigurando nuestros núcleos industriales y sectores clave. Tanto los sectores tradicionales, como la automoción y el acero, como las industrias emergentes de producción neta cero, como la fabricación de baterías y la energía eólica, se enfrentan a una reestructuración a gran escala.

No se puede seguir actuando como hasta ahora. Sin una acción audaz y un gasto significativo, Europa corre el riesgo de dañar y perder numerosas industrias clave. La inversión en innovación, mejora de las competencias y cohesión social es esencial, no solo para mantener las empresas, sino para garantizar empleos de alta calidad y una distribución equitativa de la riqueza. Como subraya el informe Draghi, la competitividad de Europa no puede depender del recorte de gastos sociales; exige una inversión sin precedentes y una estrategia industrial clara que construya un futuro sostenible y próspero para todos. Como primer paso, el Pacto Industrial Limpio, prometido por la Presidenta von der Leyen, debe conseguir tanto la descarbonización como la creación de empleos de calidad, garantizando que la acción por el clima y la justicia social vayan de la mano para proteger a los trabajadores y trabajadoras.

Una política industrial es una intervención en el mercado, adoptada por un gobierno o por una autoridad con poder de convocatoria, como la Comisión Europea, destinada a lograr uno o varios resultados económicos específicos. Toda política industrial debe tener unos objetivos claros: se trata de una política industrial para el empleo de calidad, cualificado, bien remunerado y sindicalizado en toda Europa, en consonancia con un modelo económico sostenible para las personas y el planeta.

El Congreso de la CES 2023 señaló la política industrial como una prioridad clave para la CES.

La CES define la política industrial de la siguiente manera: "*La política industrial europea abarca el marco normativo, las intervenciones públicas y privadas y los instrumentos para apoyar, promover y orientar las actividades económicas encaminadas a la consecución de empleos de calidad y progreso social en todos los sectores y regiones de Europa, así como actividades económicas sostenibles para las personas y el planeta*".



Para la CES, una política industrial europea debe ser inclusiva: esto significa que debe abarcar a la UE y a sus Estados miembros, así como a los países candidatos a la adhesión (Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania), Islandia, Noruega, Suiza y el Reino Unido. La inclusividad también requiere una mayor comprensión y apoyo a los retos a los que se enfrentan los Estados más pequeños.

Una política industrial europea requiere una fuerte cooperación con las Federaciones Sindicales Europeas para garantizar la dimensión sectorial. Debe abarcar no sólo la industria manufacturera, sino todos los sectores, y debe abordar no sólo las transiciones verdes, sino todas las transiciones.

El papel del Estado y del sector público

Es necesario que el Estado y las autoridades públicas desempeñen un papel fuerte para impulsar de forma proactiva la configuración de la transformación, intervenir en los asuntos económicos y garantizar el progreso social, empleos de alta calidad y actividades económicas sostenibles. La UE y los gobiernos nacionales deben desempeñar un papel más importante a la hora de equipar a las industrias para que puedan hacer frente a la magnitud del reto de la descarbonización. A medida que las emisiones climáticas se vuelven posiblemente más difíciles de reducir, las emisiones de carbono que nos sobran son limitadas. Además, como los recursos son cada vez más escasos, debemos decidir la mejor manera de utilizarlos. El objetivo del Estado y del sector público debe ser garantizar que acometemos tareas que respondan a las necesidades materiales, sociales y de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

El sector público es parte integrante de nuestra política industrial: una política industrial europea sólida debe basarse en unos servicios públicos y una administración pública resilientes y bien dotados de recursos. Las inspecciones de trabajo, las administraciones tributarias, las agencias de protección del medio ambiente y las de concesión de permisos necesitarán más recursos para responder a las necesidades de la industria.

Para sostener una economía europea basada en empleos de calidad en el sector privado debe haber un sector público fuerte y bien financiado, que preste servicios públicos de alta calidad, como una sanidad y una educación excelentes, apoyo a las personas mayores y vulnerables, y con infraestructuras sociales y físicas limpias, fiables y eficientes, incluidos los sistemas de energía y transporte, y una vivienda adecuada, digna y asequible.

Elementos esenciales para una política industrial europea en favor del empleo de calidad

La ejecución de una política industrial europea en favor del empleo de calidad exige:

- La plena participación de los interlocutores sociales; la política industrial europea debe desarrollarse, implementarse y supervisarse a través del diálogo social y la negociación colectiva.
- Liderazgo al más alto nivel: para que una política industrial europea funcione, debe ser defendida al más alto nivel. Esto significa que la Comisión Europea



y los gobiernos deben comprometerse a que sea un éxito.

- No habrá una política industrial significativa a menos que los gobiernos europeos individuales se comprometan con dicha política dentro de sus propios países. También debería considerarse la creación de un Consejo de Estrategia Industrial, que incluya a los Comisarios y Comisarias pertinentes y a las y los Ministros responsables, así como a los interlocutores sociales intersectoriales y sectoriales.
- Para que el diálogo social sea plenamente efectivo, es necesario promover y financiar la sindicalización, especialmente en los nuevos sectores, en los Estados miembros y en las regiones donde la cobertura de la negociación colectiva es baja.

Contexto político

Esta resolución sigue a la publicación de las Orientaciones Políticas de Ursula von der Leyen en julio de 2024, antes de su reelección como Presidenta de la Comisión Europea. En esas directrices, la Presidenta von der Leyen pedía:

- Una hoja de ruta sobre empleos de calidad, elaborada con los interlocutores sociales, para apoyar salarios justos, buenas condiciones laborales, formación y transiciones laborales justas para trabajadores, trabajadoras y autónomos, en particular aumentando la cobertura de la negociación colectiva;
- Un nuevo Pacto para el Diálogo Social Europeo a principios de 2025;
- Un nuevo Pacto Industrial Limpio para industrias competitivas y empleos de calidad, en los primeros 100 días de mandato;
- Una Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial para apoyar a las industrias y empresas en la transición;
- Una revisión de la Directiva sobre contratación pública que permita dar preferencia a los productos europeos en los contratos públicos de determinados sectores estratégicos.

Las Orientaciones Políticas reconocían la importancia de unas cadenas de suministro resilientes en toda Europa: "Hemos visto de primera mano los peligros de la dependencia o de la fragilidad de las cadenas de suministro, desde los productos médicos en la pandemia hasta el chantaje energético de Putin o el monopolio de China sobre materias primas esenciales para baterías o chips".

Von der Leyen también anunció un *"nuevo enfoque de la política de competencia, mejor orientada a nuestros objetivos comunes y que apoye más a las empresas que se expanden en los mercados mundiales, garantizando siempre unas condiciones de competencia equitativas"*. Según se establece en las Directrices, el control de las concentraciones debe estar mejor equipado para evaluar los aspectos estratégicos relacionados con los mercados globales, las concentraciones de mercado, la innovación y la capacidad de recuperación.

En cuanto a la tecnología, las Orientaciones Políticas también afirmaban: "Los gigantes tecnológicos deben asumir la responsabilidad de su enorme poder



sistémico en nuestra sociedad".

Garantizar empleos de calidad

La política industrial debe diseñarse con el objetivo de mantener, garantizar y crear empleos de calidad en Europa. Vivimos tiempos de transición, incluidas las transiciones verde y digital. Una política industrial debe tratar de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias de este cambio. Se necesita una estrategia de introducción progresiva de empleos de calidad concomitante con la supresión progresiva de empleos en los sectores afectados por la descarbonización. Debería preocuparse por las siguientes cuestiones ¿Qué empleos podemos proteger? ¿Qué empleos, en nuevos sectores, con la inversión adecuada, podemos desarrollar, traer y expandir a Europa? ¿Cómo minimizar la pérdida de puestos de trabajo? Y cuando se pierdan puestos de trabajo, ¿cómo garantizamos que puedan crearse nuevos empleos sindicales de calidad, altamente cualificados y bien remunerados para sustituirlos en la misma región y que las personas trabajadoras reciban pleno apoyo en la transición?

La CES define los empleos de calidad como aquellos que incluyen lo siguiente: (i) negociación colectiva, (ii) pleno respeto de los derechos sindicales y de los trabajadores y trabajadoras, (iii) salarios justos, (iv) seguridad en el trabajo y protección social, (v) formación sin costes y durante el tiempo de trabajo, (vi) buenas condiciones de trabajo, (vii) salud y seguridad en el lugar de trabajo, (viii) conciliación de la vida laboral y familiar, (ix) igualdad y no discriminación.

Las inversiones en la economía a nivel nacional y de la UE deben estar vinculadas al progreso social y medioambiental y a empleos de calidad, a través de fuertes condicionalidades sociales. Es evidente que se necesitará una gran cantidad de financiación para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos y, dada la tendencia de muchas empresas a centrarse en la maximización de los beneficios a corto plazo y en los intereses de los accionistas, es necesario que el apoyo financiero a las empresas esté vinculado a acciones y comportamientos corporativos que ayuden a superar esos retos en lugar de intensificarlos. También deberían introducirse condicionalidades medioambientales y fiscales.

Una política sólida de competencias y cualificaciones, que incluya el reciclaje y la mejora de las cualificaciones, es una parte esencial de esta política industrial. Las empresas deben pagar la parte que les corresponde en la financiación de esta política de competencias y cualificaciones. La protección social y el seguro de desempleo son importantes en la transición de las trabajadoras y trabajadores de un empleo a otro; hay motivos para una política de transición laboral a escala europea.

Es urgente revisar las directivas de contratación pública de la UE para garantizar que el dinero público se destina a empresas, incluidas las subcontratistas, que respetan los derechos laborales y sindicales, que negocian con los sindicatos y cuyos trabajadores y trabajadoras están cubiertas por convenios colectivos. Las empresas que incumplan las normas de salud y seguridad deben quedar excluidas de los contratos públicos.

Como elemento importante de las políticas industriales, el marco jurídico de la UE en materia de competencia debería alinearse a los mismos objetivos generales,



a fin de contribuir eficazmente a la creación de empleo de calidad y conductas empresariales responsables. Concretamente, esto significa ayudas estatales, control antimonopolio y de las fusiones con fuertes condicionalidades sociales y la debida consideración a sus impactos en el mercado laboral.

Una política industrial de éxito debe alcanzar los objetivos de descarbonización y apoyar el crecimiento y el desarrollo del empleo de calidad, así como la cohesión social. La sostenibilidad es un concepto económico, social y medioambiental. La política industrial debe garantizar la anticipación y la gestión del cambio y una transición justa basada en el diálogo social y la negociación colectiva. El actual mecanismo de transición justa de Europa no consigue salvaguardar y crear empleos de calidad, en contraste con la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU., que pretende estimular la inversión en tecnología verde e incorpora una condicionalidad significativa, obligando a las empresas que buscan créditos fiscales a contratar aprendices remunerados, apoyar la sindicalización y el pago de salarios justos. Una transición justa es especialmente importante para los países cuyas economías aún se basan en gran medida en los combustibles fósiles. Además, sin inversión en una transición justa, será imposible que los gobiernos puedan contar con las personas trabajadoras. Por esta razón, urge una directiva de la UE sobre transición justa. La mejora de las cualificaciones y el derecho a la formación para todos sin coste para las trabajadoras y trabajadores y durante el tiempo de trabajo deben estar garantizados, junto con las inversiones adecuadas y los programas de cualificación y recualificación necesarios para lograr este objetivo.

Una energía limpia, fiable y asequible es esencial para alimentar la industria europea. Es urgente garantizar el despliegue acelerado de energías renovables y descarbonizadas. El diseño del mercado energético europeo y la financiación de la energía europea son cuestiones críticas que deben abordarse. Es vital que Europa reconozca la energía como un bien público y reduzca la dependencia energética de Europa mediante el desarrollo de fuentes de energía sostenibles nacionales y medidas de reducción de la demanda, luchando al mismo tiempo contra la pobreza energética. Europa debe mejorar en la producción de transportes más ecológicos, como aviones, barcos y material rodante. Avanzar hacia una economía circular implica una transformación fundamental de la economía y del sistema industrial a todos los niveles, por lo que requiere una gran anticipación y preparación.

Es clave dar forma al progreso tecnológico para garantizar que sus beneficios se compartan con los trabajadores y trabajadoras y sirvan al bien de la sociedad. La transformación digital debe centrarse en el ser humano y tener en cuenta su impacto medioambiental. Las máquinas y otras inversiones tecnológicas, como los robots, pueden mejorar tanto las condiciones de trabajo como los salarios si se hacen bien.

La competitividad europea debe basarse en el progreso social y las normas medioambientales, el empleo de calidad y la convergencia social y salarial al alza, y promover la negociación colectiva y el diálogo social, no en el dumping social y la carrera a la baja en términos de salarios y condiciones laborales.



Garantizar inversiones de la magnitud necesaria

La política industrial debe respaldarse con inversiones de la magnitud necesaria para hacer frente a los retos. Como han señalado Mario Draghi y muchos otros, las inversiones presentadas hasta ahora por las instituciones europeas para apoyar una política industrial son insuficientes. En la actualidad, China, India y Estados Unidos están aumentando significativamente su capacidad en energías renovables e invirtiendo a gran escala en investigación e innovación. La diferencia de financiación entre Europa y Estados Unidos en términos de inversión equivale a medio billón de euros al año. Las subvenciones de China a las industrias de energía neta cero duplican las subvenciones de la UE en relación con el PIB, lo que distorsiona el mercado y les permite dominar tecnologías clave. Las actuales restricciones de la UE al endeudamiento limitan aún más la capacidad de los Estados miembros con mayor deuda y déficit para hacer frente a las necesidades de gasto ecológico.

Debe existir un instrumento de inversión permanente a escala de la UE que garantice los recursos necesarios en todos los sectores y en todos los Estados miembros y regiones para la política industrial y para los objetivos sociales y ecológicos, sobre la base de las experiencias positivas de la UE Next Generation y el fuerte enfoque laboral de SURE. Además de una auténtica capacidad fiscal para la inversión, un fondo de soberanía de la UE para una transición socioeconómica justa y bienes comunes son pilares necesarios para la política industrial.

Buscamos un mundo laboral mejor y más igualitario después de las transiciones. Para ello es necesario que los fondos de transformación de la UE apoyen a las mujeres, jóvenes y otros grupos infrarrepresentados que actualmente no tienen empleo, educación o formación, y que el sector privado contribuya con su parte de los fondos a impulsar el progreso social. Deberían formar parte de las herramientas de inversión permanente.

La escasa financiación de los organismos reguladores también pone en peligro a los trabajadores y trabajadoras y esto debe abordarse.

Aunque no es una panacea, la ayuda estatal es un elemento importante. Es necesaria una reforma con visión de futuro del marco de las ayudas estatales para que los Estados miembros puedan aplicar políticas económicas proactivas que generen empleos de calidad y progreso social, así como actividades económicas sostenibles para las personas y el planeta.

Las normas sobre ayudas estatales deben reformarse para promover empleos de calidad, teniendo en cuenta al mismo tiempo el riesgo de fragmentación entre naciones y las capacidades de financiación diferenciadas de los gobiernos nacionales.

La reintroducción de políticas de austeridad es incompatible con una política industrial europea eficaz en favor del empleo de calidad. Esto exige una fiscalidad progresiva. Además, una política industrial europea no puede caer en la trampa de un enfoque retrospectivo centrado en la desregulación. Debemos buscar las formas más eficaces de alcanzar los objetivos de las medidas reguladoras. La clave está en una aplicación estricta, inspecciones y administraciones públicas



sólidas. Unas normas eficaces y protectoras garantizan la igualdad de condiciones y no deben considerarse un lastre para la competitividad.

Desarrollar un enfoque basado en el lugar

Una economía y una política industrial fuertes no pueden crearse de forma aislada. Las evoluciones económicas positivas y negativas tienen fuertes repercusiones en las regiones y territorios en los que se asientan las actividades, con consecuencias directas e indirectas sobre el empleo y la economía. Una política industrial europea tiene que basarse en el lugar. Es esencial que los gobiernos regionales, subregionales y locales trabajen con los sindicatos sobre el terreno, que están integrados en las estructuras económicas locales y son una fuente inigualable de experiencia. Las pequeñas y medianas empresas (PYME), que constituyen la mayoría de los empleadores y suelen tener implantación regional, son vitales para las comunidades, las cadenas de suministro de la industria y las ventas. Requieren un apoyo significativo y específico para garantizar su resiliencia y su contribución continuada a la economía.

Es importante basarse en el principio del "derecho a quedarse", garantizando un desarrollo económico sostenible y empleos de calidad en todos los Estados y regiones. Garantizar mejores condiciones de trabajo y empleos de calidad - también en nuevas ocupaciones- también es esencial para superar la escasez de mano de obra y de cualificaciones.

La política industrial también deberá impedir que se sigan deslocalizando industrias y puestos de trabajo en el extranjero y apoyar más activamente la relocalización de industrias y puestos de trabajo en Europa, redoblando al mismo tiempo la lucha contra el dumping social, fiscal y medioambiental.

Garantizar la igualdad de condiciones

China ha remodelado el orden económico mundial en los últimos 45 años, pero es evidente que el comercio internacional debe realizarse entre empresas y países siguiendo las mismas reglas. Es necesario garantizar la igualdad de condiciones, también con respecto a otros derechos laborales y sindicales, el derecho de asociación como parte de sindicatos independientes, en China y en otros terceros países.

Una política ambiciosa y sostenible de Autonomía Estratégica Abierta de la UE es el camino a seguir. Esto incluye centrarse en el suministro y uso sostenible de energías limpias asequibles, materias primas estratégicas y tecnologías como los microchips. También es fundamental garantizar que la política comercial de la UE respalde la política industrial y ofrezca unas condiciones de igualdad reales.

Como indicó la Presidenta von der Leyen en sus Orientaciones Políticas, existe una excesiva concentración en unas pocas empresas en el sector de las tecnologías de la información, lo que pone de relieve la importancia de las infraestructuras públicas digitales.

Una política industrial debe garantizar que las empresas europeas puedan competir con las grandes corporaciones de países como China y Estados Unidos. Sin embargo, el compromiso sindical es necesario para garantizar la integridad territorial, de modo que las grandes empresas europeas no estén ubicadas en



unos pocos distritos industriales clave, sino que estén repartidas por las naciones y regiones de Europa.

Aunque el control de las fusiones debería tener en cuenta en mayor medida la competencia global y futura, la aprobación de fusiones y adquisiciones debería someterse a pruebas claras de interés público con fuertes condicionalidades sociales. Deben imponerse remedios de conducta para garantizar el respeto de los derechos adquiridos de las trabajadoras y trabajadores, la negociación colectiva y la democracia en el trabajo, así como prohibir los despidos masivos o las deslocalizaciones, y prescribir oportunidades de mejora y reciclaje profesional para la mano de obra. La posición dominante y la concentración deben evaluarse cada vez más también en relación con las repercusiones en el mercado laboral y la cohesión social y territorial, centrándose no sólo en los comportamientos empresariales excluyentes, sino también en los explotadores.

Apoyo a todos los sectores y empleos de calidad en todos los sectores

Una política industrial europea debe apoyar a todos los sectores de la economía para que prosperen y garanticen empleos de calidad y actividades económicas sostenibles. Deben desarrollarse y aplicarse medidas de apoyo específicas para cada sector, entre las que se incluyen las siguientes

- El sector manufacturero europeo está directamente relacionado con 36 millones de puestos de trabajo. Se necesitan políticas industriales sectoriales para mantener la diversidad industrial y una amplia base industrial dentro de la UE. Deben desarrollarse planes de acción específicos y vías de transición para todos los sectores/cadenas de suministro de interés estratégico o que se enfrentan a cambios estructurales. Entre ellos se incluyen:
 - (Sub)sectores y cadenas de valor con un fuerte potencial de crecimiento, rápidos cambios tecnológicos (por ejemplo, las tecnologías facilitadoras esenciales) o que se enfrentan a una fuerte competencia internacional;
 - Sectores intensivos en energía que deben pasar a estructuras más sostenibles e incluso descarbonizarse por completo para mediados de siglo.
 - "Estrategias premium" para que las industrias de baja y media tecnología apoyen su modernización estructural aprovechando su potencial de innovación y mejorando sus procesos de producción.
- Los servicios privados, como la limpieza, la seguridad, las finanzas, las TIC, la logística y el comercio minorista, representan la mayor parte (y creciente) del empleo, con más de 100 millones de puestos de trabajo directos. Es necesario un apoyo público específico para garantizar transiciones justas en estos sectores, gestionar los importantes retos de transformación a los que se enfrentan, con el fin de salvaguardar los empleos de calidad, el progreso social y la resiliencia económica. Es esencial, entre otras cosas - para: (i) potenciar la inversión pública en servicios, (ii) promover la calidad del empleo en los servicios a través de la negociación colectiva, (iii) fomentar criterios sociales en la contratación pública, (iv) combatir la economía informal en los



servicios a través de políticas públicas (v) revalorizar los servicios de interés general.

- La pandemia de Covid-19 también puso de relieve el papel fundamental que desempeñan los servicios esenciales, tanto públicos como privados, en nuestra vida cotidiana y nuestro bienestar. Para salvaguardar empleos de calidad, el progreso social y la resistencia económica, los servicios esenciales requieren un apoyo específico para abordar los importantes retos a los que se enfrentan ahora y para estar preparados en el futuro. Debemos promover la negociación colectiva, mejorar la supervisión pública de las condiciones de empleo a través de fuertes medidas de política pública e incorporar criterios sociales a la contratación pública.
- Los servicios públicos también son esenciales para el éxito de la política industrial. Es necesario invertir en infraestructuras públicas, incluidas redes energéticas, digitales y de transporte que funcionen correctamente. Los bancos públicos también desempeñan un papel importante en el suministro de infraestructuras económicas, sociales y sostenibles.
- Para la agricultura y los sistemas alimentarios, es necesario garantizar una Política Agrícola Común más justa. La dimensión social de la PAC debe reforzarse aún más en conjunción con su próxima reforma en 2027. Un sistema alimentario sostenible que garantice la seguridad alimentaria mundial, así como la sostenibilidad medioambiental y social, solo puede lograrse abordando problemas sistémicos de larga data que afectan a los actores vulnerables de la cadena alimentaria, como la concentración de poder, la especulación en los mercados de productos alimentarios básicos y un enfoque insostenible de los acuerdos comerciales. Europa debe tomar medidas para asegurar su propia producción de fertilizantes como elemento esencial para la producción de alimentos, a fin de evitar una nueva dependencia de las importaciones y el riesgo asociado de manipulación de los precios de los alimentos. También deben tomarse medidas para reforzar las infraestructuras hídricas con el fin de minimizar la escasez de agua.
- El sector turístico es uno de los principales pilares de la economía de la UE. Representa alrededor del 10% del PIB de la UE y proporciona empleo a aproximadamente 12 millones de personas trabajadoras en la UE. Sin embargo, el desarrollo del sector se ha basado principalmente en un modelo económico basado en la maximización de los beneficios y en una creciente precarización del empleo, al tiempo que perjudicaba a las comunidades locales y al medio ambiente. Para el futuro, necesitamos un modelo turístico diferente basado en unos derechos de negociación colectiva sólidos, la estabilidad del empleo, la fidelidad de los visitantes, un menor impacto en el medio ambiente y la reducción de la estacionalidad.
- El sector de la construcción de la UE emplea a 13 millones de personas y representa casi el 10% del PIB de la Unión Europea, lo que lo convierte en una parte crucial de la economía. Un sector de la construcción sostenible y resistente tiene implicaciones de gran alcance, no sólo para el crecimiento económico, sino también para el progreso social y medioambiental. El sector



de la construcción es intrínsecamente local, pero su mano de obra es muy móvil, depende en gran medida de trabajadoras y trabajadores desplazados y de las cadenas de subcontratación y está dominado por las PYME. Esta fragmentación crea numerosos retos, entre ellos un mayor riesgo de fraude, dumping social y delitos laborales.

- Para resolver estos problemas, urge una acción legislativa decisiva que limite la subcontratación y promueva el empleo directo. Deben prohibirse las agencias de trabajo temporal en el contexto del desplazamiento de personas trabajadoras, ya que a menudo contribuyen a la precariedad de las condiciones laborales y socavan la competencia leal. Deben aprovecharse las políticas de contratación pública para garantizar que las condicionalidades sociales de los empleos de calidad promuevan mejores prácticas de empleo, exigiendo que los contratos sólo se adjudiquen a empresas que respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ofrezcan empleos estables y directos y promuevan salarios justos basados en convenios colectivos sectoriales. Además, abordar la escasez de mano de obra y hacer que el sector sea más atractivo requiere un enfoque integral para mejorar las condiciones de trabajo, aumentar las oportunidades de formación y garantizar que la industria apoye el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores. En este contexto, también cabe señalar que es necesario seguir desarrollando el concepto de “derecho a permanecer”, ya que al mismo tiempo se necesitan vías de migración justas e iniciativas que apoyen una movilidad justa, garantizando el respeto de los derechos de las personas trabajadoras a través de las fronteras, independientemente de sus relaciones laborales.
- Para el transporte, las metas deben priorizar ante todo los objetivos estratégicos de promoción del desarrollo económico sostenible, la creación de empleos de calidad y el avance de la cohesión social y territorial. Es necesario garantizar una mejor coordinación con la política industrial, junto con las inversiones necesarias en infraestructuras sostenibles. La capacidad del sector para cumplir su función social y económica vital se está viendo socavada por la falta de empleos de calidad, lo que provoca una escasez de mano de obra debilitante. La liberalización y la búsqueda de la competencia a toda costa han creado una situación en la que los operadores de transporte compiten principalmente por quién puede reducir más los costes laborales. La estructura de incentivos del sector del transporte debe cambiar para fomentar la inversión en empleos de alta calidad, infraestructuras sostenibles y vehículos, en lugar de la fragmentación y la falta de inversión. Los responsables políticos deben entender el transporte como una infraestructura estratégica, no como un mercado a liberalizar. La mayor parte del transporte se realiza dentro de Europa, lo que significa que la competitividad es una cuestión discutible. Se necesitarán algunas infraestructuras europeas transfronterizas y es importante asegurarse de que no se centran simplemente en el núcleo. Las redes de transporte han visto cómo se invertía en las rutas principales, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos, pero esto a menudo deja atrás las redes periféricas y contribuye a la pobreza del transporte, y esto debe cambiar.



- Hay que velar por que la política industrial se adapte a las necesidades de cada modo de transporte. En los modos en los que las empresas europeas compiten con las de terceros países -especialmente la aviación civil de larga distancia y los puertos- hay que tomar medidas para reducir las desventajas competitivas sin renunciar a las normas sociales y medioambientales. En el transporte aéreo intercontinental, la UE debe ayudar a las aerolíneas europeas a competir con empresas de terceros países permitiendo la consolidación y eliminando los acuerdos de transporte aéreo injustos. Del mismo modo, el sector portuario europeo se está viendo afectado por una aplicación chapucera del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCCDE) en el transporte marítimo, que desvía a los cargadores a puertos vecinos no pertenecientes a la UE. Esto ha puesto en peligro el empleo y ha creado el riesgo de fugas de carbono. Hay que hacer más para garantizar que los puertos de la UE, como infraestructuras estratégicas vitales, no se vean perjudicados.

Una política industrial para toda Europa

Esta política industrial se aplica a toda Europa: la UE, así como Noruega, Suiza, el Reino Unido y los países candidatos a la adhesión a la UE. Cualquiera que sea la futura relación del Reino Unido con la UE, es esencial que los derechos de los trabajadores y trabajadoras adquiridos durante más de 50 años de pertenencia a la UE no se pierdan para las personas trabajadoras del Reino Unido después del Brexit.

Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania se encuentran en distintas fases del proceso de adhesión a la UE. Es importante que se adhieran plenamente al acervo social de la UE y refuercen el diálogo social antes de completar el proceso de adhesión. Esto incluye necesariamente el pleno respeto del papel de los sindicatos y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos. Este debe ser un punto clave del proceso de ampliación y de los debates.

Traducido por Internacional CEC UGT